

DESTACADOS

- Aumento significativo del confinamiento y restricciones a la movilidad
- Los ataques contra la población civil no cesan

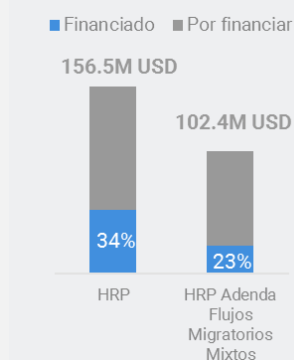
CIFRAS

No. PDI en eventos masivos Ene – Nov 2018 (OCHA)	31.919
No. Personas con restricciones al acceso Ene – Nov 2018 (OCHA)	1.119.460
No. de ataques contra la población civil Ene – Nov 2018 (OCHA)	1.798
No. Afectados por desastres naturales Ene - Nov 2018 (UNGRD)	330.139

FONDOS

76.381.987

Total fondos humanitarios (US\$) recibidos en 2018, corte al 13 de diciembre de 2018 (4W)



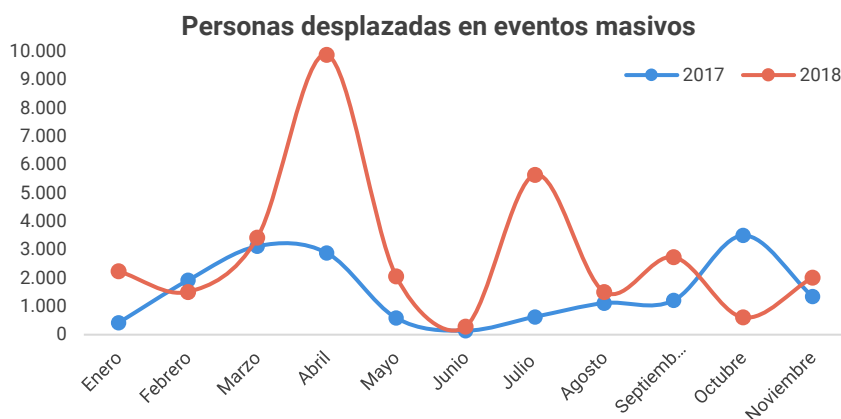
Crédito: NRC

En este número

- Incremento del impacto humanitario en 2018 P.1
- Miles de personas afectadas por la temporada de lluvias P.5
- Preocupa el contexto humanitario en Catatumbo P.5
- Retos para abordar las crecientes necesidades en Colombia P.7
- Mensajes desde el terreno P.8

Incremento del impacto humanitario en 2018

Las emergencias por desplazamientos masivos continúan siendo uno de los hechos victimizantes más destacados este año, por la persistencia de diferentes eventos de conflicto y violencia armada en varias regiones del país. Por otro lado, la temporada de lluvias que desencadena grandes inundaciones y la llegada de personas provenientes de Venezuela y colombianos retornados, se suma al impacto humanitario configurando situaciones de triple afectación, siendo un motivo de alerta y preocupación en Colombia. El notable incremento, tanto en número de personas desplazadas (89%) como en eventos (77%) en los 11 meses de 2018, frente al mismo periodo de 2017, es un indicador del deterioro de la situación humanitaria; en este período, al menos 31.919 personas se desplazaron en eventos masivos, superando las cifras de los últimos cinco años.



Este aumento alarmante concuerda con análisis de la institucionalidad (Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas)¹, y otras organizaciones que también responden a estas emergencias (Consejo Noruego para Refugiados -NRC-)². NRC alerta sobre el riesgo en las zonas que fueron tradicionalmente más afectadas por el conflicto armado, antes de la firma del acuerdo con las FARC-EP³ (Meta, Guaviare y la frontera con Venezuela); también resaltó que en estas regiones hay un alto número de grupos armados que se enfrentan constantemente y una tendencia de mayor desprotección de la población. La principal causa (69%), sigue siendo los enfrentamientos entre diferentes

¹ <https://colombia2020.elespectador.com/pais/los-desplazamientos-masivos-en-2018-superaron-los-del-2017-unidad-para-las-victimas>

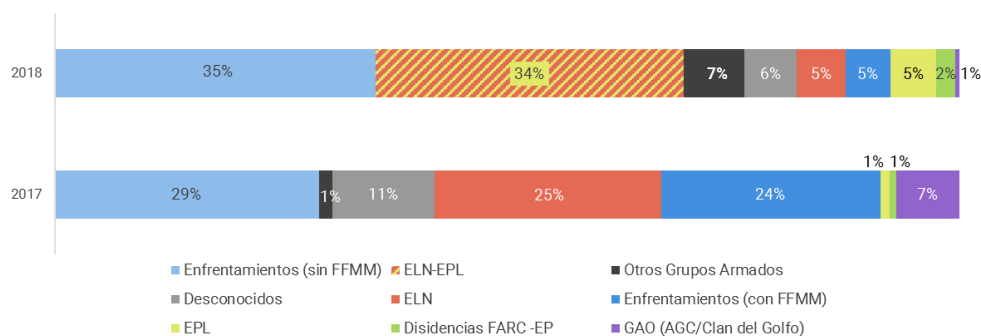
² <https://www.semana.com/nacion/articulo/26000-personas-se-han-desplazado-solo-en-el-2018-consejo-noruego/589862>

³ FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo; antigua guerrilla que hizo parte del conflicto histórico colombiano; firmaron acuerdo de Paz con el Gobierno de Colombia en noviembre de 2016.

La violencia generalizada y el conflicto sigue siendo la principal causa del aumento en emergencias como desplazamientos y confinamientos, limitaciones de acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales de muchas comunidades rurales y étnicas

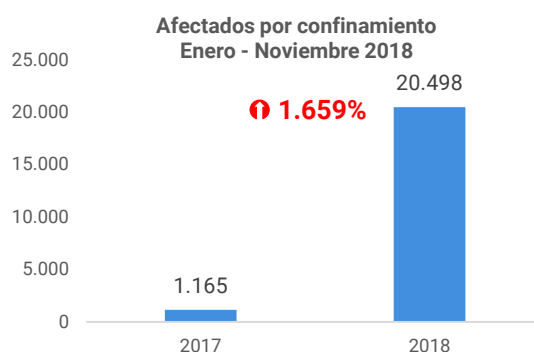
grupos armados; en el contexto actual, llama la atención la reconfiguración de los grupos armados respecto al año anterior, quienes ya sean por sus acciones conjuntas o unilaterales son responsables de estos hechos. Los municipios de ocurrencia de eventos de desplazamientos masivos también incrementaron, pasando de 30 a 37 (>17%); sin embargo, preocupa la concentración de estos eventos en municipios como San Calixto, Hacarí y Ábrego (Norte de Santander), Tumaco, Roberto Payán y Olaya Herrera (Nariño), Tarazá y Cáceres (Antioquia) y Riosucio (Chocó), los cuales representan el 71 por ciento de las personas desplazadas por esta causa. La recurrencia de estas emergencias limita y desborda las capacidades locales de respuesta, lo que evidencia la necesidad de la complementariedad por parte de las organizaciones humanitarias que tienen presencia en el país, en un escenario donde disminuye cada vez más el financiamiento humanitario para las víctimas del conflicto y la violencia.

Actores responsables de desplazamientos masivos



Aumento significativo del confinamiento y las restricciones a la movilidad y al acceso

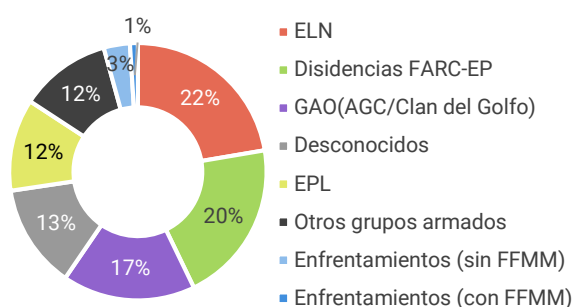
La violencia generalizada y el conflicto siguen siendo la principal causa de emergencias como confinamientos, debido a los vacíos en la respuesta frente a las limitaciones de acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales de muchas comunidades rurales, situación que agudiza las necesidades humanitarias por largos períodos de tiempo. En el seguimiento que realiza OCHA con apoyo de UMAIC⁴, se registran cerca de 20.500 personas confinadas este año, especialmente en departamentos del Pacífico (Chocó, Valle del Cauca y Nariño) y la Frontera con Venezuela (Norte de Santander). Departamentos como Chocó también han registrado confinamientos por enfrentamientos y amenazas entre grupos armados que, sumado a la falta de acceso físico impactan especialmente en las comunidades indígenas y afrocolombianas. Este año, al menos 11.600 personas han sufrido por esta causa en el departamento (56% de la cifra nacional).



En cuanto a restricciones a la movilidad y acceso las cifras sobrepasaron el millón de personas afectadas (1.119.460 personas) en 240 eventos, principalmente en departamentos como: Nariño, Antioquia y Norte de Santander. Para destacar algunos ejemplos, se registraron ataques contra la infraestructura eléctrica en Tumaco (Nariño) que dejaron sin acceso a servicio de energía y agua durante 14 días a más de 200.000 personas; no obstante, otros municipios también se afectaron por esta causa (Olaya Herrera, Roberto Payán, Ricaurte). En Antioquia, toques de queda y amenazas a través de panfletos en la subregión de Bajo Cauca afectaron a cerca de 200.000 personas, incluidos

⁴ <https://umaic.org/>

Actores causantes de restricciones al acceso por violencia armada Enero - Noviembre 2018

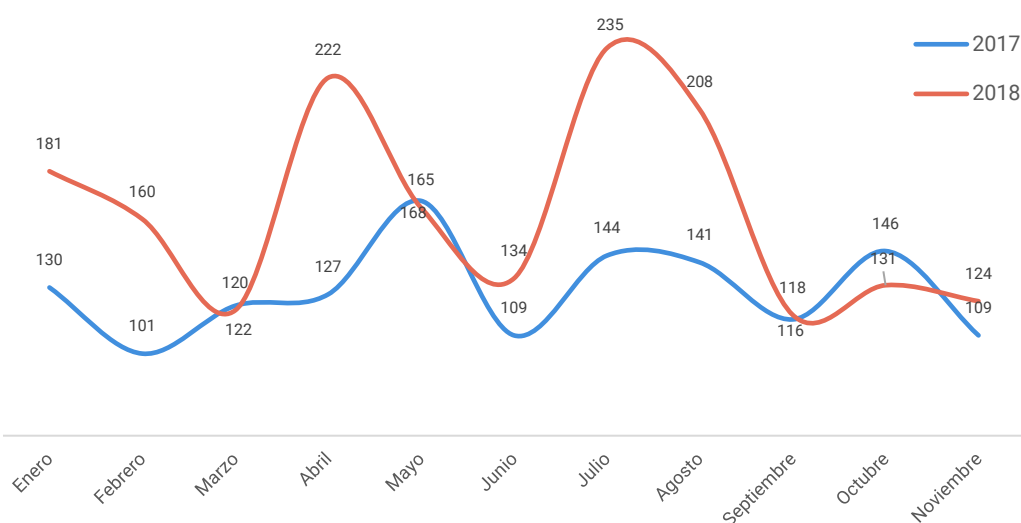


jóvenes (9.000); en Medellín unos 6.700 estudiantes dejaron de asistir a clases por la intensidad de las confrontaciones entre bandas urbanas y cerca de 74.000 personas limitaron su movilidad por paros de transporte. En Norte de Santander, las restricciones se dieron en términos de acceso a alimentos, medios de vida, educación (más de 44.200 NNA y más de 500 docentes) por los enfrentamientos y amenazas, siendo utilizadas las instituciones educativas tanto como albergues (20 de ellos fueron Espacios Humanitarios de Protección) como a modo de escudo por parte de los actores armados en las confrontaciones. Las organizaciones humanitarias que brindan respuesta a las comunidades con necesidades no son ajenas al impacto; cerca de 22 organizaciones han tenido interferencia en su operación condicionando su acceso (frontera con Venezuela, pacífico, sur oriente y noroccidente), lo que podría llegar a suponer un cierre del espacio humanitario en algunos lugares.

Los ataques contra la población civil no cesan

El total de ataques contra población civil entre enero y noviembre de 2018 es 27 por ciento mayor al mismo periodo de 2017. Las amenazas persisten con la misma intensidad del año anterior, sin embargo, preocupa el incremento de eventos de tortura (>163%) y masacres (>136%), al igual que los heridos y muertos en acciones armadas, las cuales también se han intensificado este año. Sobre los actores responsables, se evidencia que, más de la mitad de los eventos son perpetrados por actores desconocidos (57%), también se destacan las disidencias FARC-EP por aumentar su participación del 5 al 11 por ciento. Al igual que en otras categorías de violencia armada, el 61 por ciento de estos ataques coincide en las regiones (Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Arauca) donde se desencadenan otros hechos. A excepción del archipiélago de San Andrés y Amazonas, en 340 municipios (30 por ciento del total nacional) del resto de los departamentos del país se reporta al menos un ataque contra civiles.

Evolución ataques contra población civil 2017-2018



A excepción del archipiélago de San Andrés y Amazonas, en 340 municipios (30 por ciento del total nacional) del resto de los departamentos del país se reporta al menos un ataque contra población civil

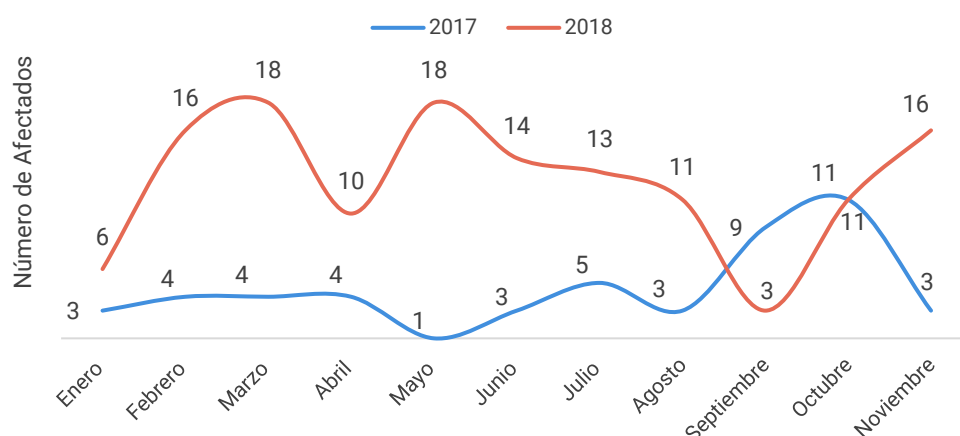
En octubre la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mencionó su preocupación por esta situación en Colombia, destacándose como el país con el número más elevado de homicidios de activistas y líderes sociales de la región (53)

Los homicidios contra civiles de diferentes perfiles (ocupación y condición) muestran un aumento considerable (61%); aunque en la mayoría de estos homicidios se desconoce la ocupación de la víctima, en el sistema **Monitor** hay registros (sin verificación) de al menos 127 líderes y defensores de DDHH asesinados. Al respecto, en octubre la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mencionó su preocupación por esta situación en Colombia, destacándose como el país con el número más elevado de homicidios de activistas y líderes sociales de la región: en una declaración manifestó que la oficina en Colombia registró el homicidio de cerca de 53 líderes de derechos humanos⁵, entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2018.

Por su parte, las víctimas reportadas como ex integrantes FARC-EP también generan preocupación. En octubre, en el marco de la presentación del cuarto informe del Secretario General, António Guterres, al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación en Colombia, el Secretario General expresó su preocupación por los ex integrantes de las FARC-EP, pues entre julio y septiembre de 2018 nueve (9) exguerrilleros fueron asesinados, con lo que el número de homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz llega a 71⁶.

Otro fuerte y creciente impacto que presentan civiles que habitan en zonas rurales con presencia de grupos armados y cultivos ilícitos, son los accidentes con minas antipersona (MAP). La presencia de estos artefactos explosivos es también la causa de confinamientos por las limitaciones a la movilidad y acceso bienes, servicios y derechos fundamentales; en casos más graves deja víctimas fatales. Según el Alto Comisionado para la Paz, el número de víctimas por minas antipersona este año (corte noviembre) ha aumentado un 245 por ciento en Colombia respecto al 2017⁷. Las cifras más recientes de Descontamina Colombia reportan 136 víctimas por Artefacto Explosivo Improvisado y Remanente Explosivos de Guerra, en 12 departamentos⁸. De ellos, 80 víctimas civiles y 56 de la Fuerza Pública. Esta práctica indiscriminada y utilizada por diferentes actores armados que hacen parte del conflicto y responsables de la violencia armada, toma relevancia nuevamente considerando que, durante los diálogos de paz se evidenció una disminución significativa de ésta.

Evolución de afectados por minas 2017-2018



⁵ <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23518&LangID=S>

⁶ <https://colombia.unmissions.org/nota-de-prensa-cuarto-informe-del-secretario-general-al-consejo-de-seguridad-sobre-la-misi%C3%B3n-de>

⁷ <https://www.semana.com/nacion/articulo/putumayo-sin-victimas-por-minas-antipersonales-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/592679>

⁸ Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Valle del Cauca

Miles de personas afectadas por la temporada de lluvias

Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), en 2018 unas 330.139 personas han resultado afectadas por eventos de desastres naturales; la mayor parte ha sido por causa de inundaciones (79%), especialmente en los departamentos de Bolívar, La Guajira, Córdoba y Chocó. Cabe aquí resaltar departamentos de la región Orinoquía (Vichada y Guainía) que entre julio y agosto registraron afectaciones para más de 55.000 personas, con mayor énfasis en comunidades indígenas. En estos dos departamentos, donde la presencia de instituciones y socios humanitarios es limitada, y donde se encuentran barreras de acceso relacionadas con la alta dispersión poblacional en el territorio (y en algunos casos la presencia de actores armados), se identificó que la respuesta humanitaria podría ser un desafío. Ante la magnitud de la crisis, el Equipo Humanitario de País (EHP) hizo un despliegue de dos misiones de evaluación intersectoriales MIRA⁹, donde se evidenciaron necesidades prioritarias en los sectores de Agua y Saneamiento Básico, Recuperación Temprana y Protección para el caso de Vichada; para el caso de Guainía se coincidió en la priorización de los dos primeros sectores además Albergue. Los hallazgos también identificaron aspectos relevantes asociados a la afectación histórica del conflicto armado e impacto por la situación de flujos migratorios mixtos; este escenario deja ver comunidades con triple afectación y brechas en la respuesta, requiriendo un enfoque intersectorial y diferencial (género, edad y etnia) para responder de manera integral.

El panorama para 2019 en Colombia ante la alta probabilidad (80% y 90%) de la llegada del Fenómeno de El Niño, según los pronósticos del IDEAM¹⁰, preocupa porque se juntaría con la primera temporada seca del año en el primer trimestre. El déficit en las lluvias podría generar incendios de cobertura vegetal, heladas (afectando pastos y cultivos), procesos erosivos (ante la pérdida de humedad incrementa la ocurrencia de deslizamientos de tierra), altas temperaturas del aire (incremento de sensación térmica corporal afectando a la población y animales), y disminución en nivel y cauce de los ríos y control de vectores. Las regiones que pueden verse más afectadas tanto por esta causa son: Caribe, Andina, Pacífica y zonas de la Amazonía, siendo los sectores más expuestos el agropecuario y forestal, transporte, ambiente, salud, energía y acceso a agua potable¹¹.

Contexto humanitario del Catatumbo

Norte de Santander es uno, sino el mayor departamento con múltiple afectación a causa del por conflicto armado, flujo migratorio mixto proveniente de Venezuela, y en menor proporción eventos de desastres naturales; los diferentes perfiles poblaciones que habitan las comunidades del Catatumbo (víctimas del conflicto armado, los connacionales retornados y la población migrante venezolana) permanecen expuestos a múltiples riesgos de protección a causa del accionar de los actores armados en el marco de sus dinámicas de control social y territorial.

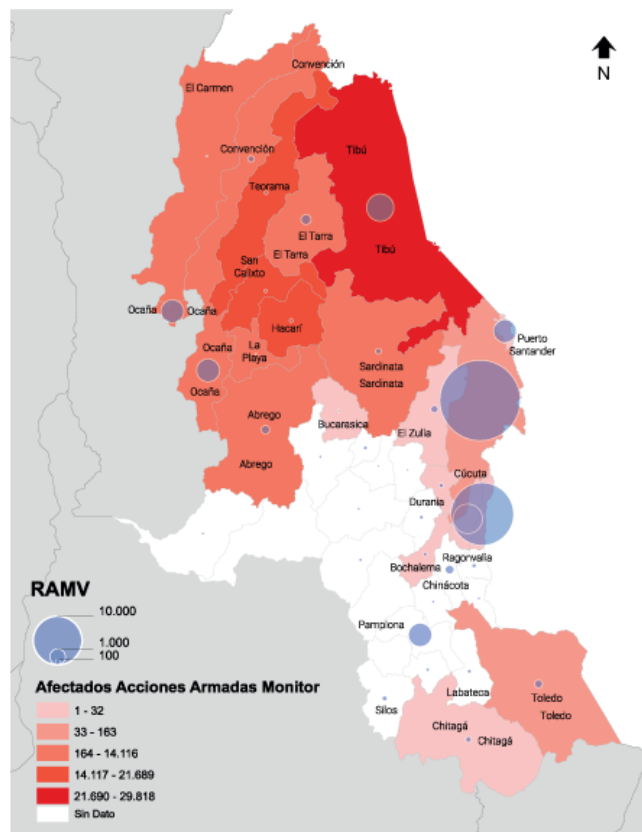
⁹ <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/mira>

¹⁰ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM -

¹¹ <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2018/Colombia-continua-la-preparacion-ante-la-posible-llegada-de-El-Ni%C3%B1o.aspx>

Preocupa el panorama para 2019 en Colombia ante la alta probabilidad (80% y 90%) de la llegada del Fenómeno de El Niño, según los pronósticos del IDEAM.

Con este panorama, miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Norte de Santander y del Grupo Temático de Protección, realizaron una misión a municipios del Catatumbo, donde pudieron determinar diferentes situaciones. La población proveniente de Venezuela se enfrenta a un control migratorio irregular en las trochas por parte de grupos armados como el ELN y el EPL; a través de identificación con carné se controla la movilidad y el acceso al trabajo de esta población, también hay víctimas de reclutamiento, homicidios, tráfico y trata de personas, explotación sexual y laboral, vinculación a economías ilícitas (cultivo de coca), entre otras. En noviembre, el defensor del Pueblo de Colombia afirmó, en un informe sobre la niñez en zonas fronterizas, que los niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente los indocumentados, están



expuestos a situaciones de alto riesgo como la trata de personas, trabajo infantil, explotación sexual, entre otros¹², que ponen en peligro su integridad física y psicológica. Así mismo, se reconoce que la presencia de grupos armados en la frontera aunado a la desescolarización y la deserción escolar, genera alto riesgo de reclutamiento y vinculación de menores en actividades ilícitas.

Las mujeres provenientes de Venezuela también son vinculadas a las economías ilícitas en roles específicos como labores de servidumbre y explotación laboral, destacándose la preparación de alimentos en las fincas

Las mujeres provenientes de Venezuela también son vinculadas a las economías ilícitas en roles específicos como labores de servidumbre y explotación laboral, destacándose la preparación de alimentos en las fincas de producción de hoja de coca. Adicionalmente, existe una proliferación de mujeres en ejercicio de sexo por supervivencia en lugares clandestinos que dificultan la verificación de sus derechos, su salud y las condiciones de estos sitios. Existe un subregistro de la población proveniente de Venezuela y de la cantidad de víctimas venezolanas del conflicto armado debido a su situación de irregularidad, la ausencia de rutas de atención, redes de apoyo, el temor a denunciar ante las autoridades, las restricciones a la movilidad y la permanencia variable en el territorio.

Debido al contexto migratorio con Venezuela, los recursos de la cooperación internacional se han focalizado principalmente en el Área Metropolitana de Cúcuta, disminuyendo las intervenciones en municipios del Catatumbo. Ante esta situación, se hace necesario formular una estrategia de atención multisectorial que mitigue los riesgos del conflicto armado y alivie las necesidades de las víctimas, así como emprender acciones tendientes a fortalecer la capacidad y respuesta institucional, ante la compleja situación de afectación mixta en el territorio y sus regiones.

¹² <http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7668/Defensor%3%ADa-pidi%C3%B3-protger-a-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-que-est%C3%A1n-en-peligro-en-zonas-fronterizas-ni%C3%B1ez-derechos-humanos-migraci%C3%B3n.htm>

Retos para abordar las crecientes necesidades humanitarias en Colombia

Por: La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Los impactos en materia de protección se presentan por la persistencia de los enfrentamientos de actores armados ilegales que se disputan el control territorial, razón por la cual es vital que se mantengan activos los espacios de coordinación institucional creados por la Ley de Víctimas

A pesar de avances significativos en términos de construcción de paz, los retos en materia de protección persisten en algunos territorios como el departamento de Norte de Santander, el departamento de Nariño, el municipio de Buenaventura, el departamento de Antioquia y el departamento del Chocó, teniendo como consecuencia el desplazamiento forzado, el confinamiento y el incremento de los homicidios contra líderes y defensores de Derechos Humanos. De acuerdo con el monitoreo realizado por ACNUR, entre enero y noviembre de 2018, se han desplazado 30.517 personas en 90 eventos masivos; los campesinos, las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen siendo desproporcionalmente afectadas.

Estas situaciones se presentan por la persistencia de los enfrentamientos de actores armados ilegales que se disputan el control territorial, razón por la cual es vital que se mantengan activos los espacios de coordinación institucional creados por la Ley de Víctimas - que entró a regir en 2011 y tendrá vigencia hasta el 10 de junio de 2021 -, y que permitirán hacer una temprana identificación de los riesgos y consecuentemente remover las causas estructurales que generan las emergencias por desplazamiento y confinamiento.

En el marco de la conmemoración de los 20 años de los Principios Rectores de Desplazamientos Internos, el Alto Comisionado reconoció que Colombia cuenta con uno de los marcos normativos más sofisticados en el mundo para la atención y reparación de las víctimas del desplazamiento forzado, ya que incorporó los Principios Rectores a la legislación interna. Igualmente, resaltó los esfuerzos en el diseño e implementación de políticas públicas que buscan atender de manera efectiva a las víctimas de desplazamiento forzado, y por la apertura para el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, agencias del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones de víctimas, en los procesos de asistencia técnica que han enriquecido el debate en favor de los derechos de las víctimas. Finalmente, ACNUR apoya al Estado para responder a las necesidades de prevención y protección frente a los riesgos de desplazamiento y confinamiento, así como para avanzar en la búsqueda de soluciones a su situación.

Sumado a lo anterior, tres millones de venezolanos han abandonado su país desde el 2015. Más de un millón se encuentra en Colombia, donde el Gobierno hace esfuerzos para regularizar su estatus migratorio con el Permiso Especial de

Permanencia (PEP), para que tengan acceso a servicios sociales y trabajo. Según Migración Colombia, a corte del 30 de septiembre de este año, 646.188 venezolanos se encuentran en situación regular, 218.098 en irregular y 167.730 en proceso de regularización, según Migración Colombia. 456.188 venezolanos han obtenido el PEP, de acuerdo con el Gobierno colombiano. “Las personas venezolanas sin acceso a un estatus legal son particularmente vulnerables a la explotación, la trata y la discriminación”, afirmó Filippo Grandi, Alto Comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) durante su visita a Colombia el pasado mes de octubre.



Crédito: ACNUR

Norte de Santander es el punto fronterizo más concurrido en Colombia, contabilizando 75 por ciento de todas las entradas terrestres. Las autoridades nacionales y locales están trabajando con ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras entidades en la zona para dar mejor abordaje a las necesidades humanitarias de quienes llegan, incluyendo refugiados y migrantes venezolanos – con más de 5.000 entradas diarias al país, muchos de ellos a pie - y alrededor de 300.000 colombianos que han retornado.

Durante su visita, el Alto Comisionado señaló la importancia de que la comunidad internacional brinde apoyo a los miles de venezolanos que cruzan la frontera, muchos de ellos, buscando protección internacional. “El constante flujo de personas venezolanas que entran a Colombia genera grandes desafíos para la satisfacción de sus necesidades humanitarias”, dijo el Alto Comisionado durante su visita a Villa del Rosario, en Cúcuta. “ACNUR está comprometido con la intensificación de su presencia y asistencia”. El Alto Comisionado constató cómo frente a este contexto desafiante ACNUR Colombia está apoyando a socios y gobiernos locales para abordar las crecientes necesidades de los venezolanos que llegan al país y que tienen necesidades humanitarias, así como de las personas desplazadas internamente y/o confinadas. Los proyectos van desde el equipamiento de cocinas y albergues temporales hasta el fortalecimiento de los recursos de los hospitales y el apoyo a las instalaciones de cuidado infantil. Adicionalmente, está ayudando a identificar aquellas personas de nacionalidad venezolana que requieren protección internacional para asegurarse que comprenden sus opciones para solicitar la condición de refugiado u obtener otro tipo de estatus legal en los países donde se encuentran.

Mensajes desde el terreno

Equipo Local de Coordinación Antioquia

La **disputa por el control territorial** entre actores armados y bandas criminales permanece en los corredores geo-estratégicos del departamento de Antioquia, asociado a las zonas donde se desarrollan economías ilícitas (cultivos ilícitos, minería ilegal), megaproyectos extractivos formalizados, proyectos de infraestructura vial, energética y portuaria de gran escala. Esta **superposición de factores se agrava con debilidades en la gestión local** para la protección de DDHH, visiones de desarrollo y su impacto en la vida de los habitantes del territorio. Como resultado, **persisten consecuencias humanitarias** como el desplazamiento forzado, amenazas contra líderes sociales, homicidios selectivos, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, violencia sexual, despojo de tierras y demora en la restitución de estas, especialmente en las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá Antioqueño.

Equipo Local de Coordinación Córdoba

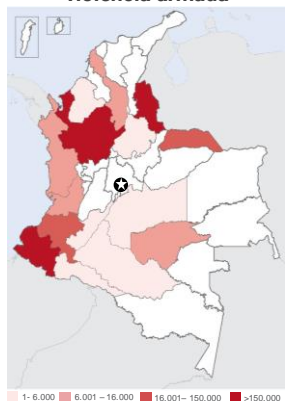
Es alarmante el **incremento de violencia y acciones armadas** especialmente en zona rural del sur del departamento de Córdoba, se refleja en **recrudescimiento del impacto humanitario y necesidades de protección**, como resultado de desplazamientos, los homicidios, incursiones a las poblaciones, limitaciones de acceso y movilidad, y amenazas a **docentes, líderes sociales, indígenas y campesinos del lugar. En este escenario niños, niñas y adolescentes campesinos e indígenas** se han visto particularmente afectados y en riesgo por el reclutamiento, la presencia de minas antipersonal, la explotación sexual y el uso por parte de estos grupos armados organizados (Los Caparrapos, Clan del Golfo), y ahora con la llegada de las disidencias de las FARC-EP disputándose el control social y territorial.

Para más información, favor contactar:

Sylvia Echeverry: echeverry@un.org Tel. (+57-1) 6221100 Ext. 1104

Los boletines humanitarios de OCHA están en: www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int

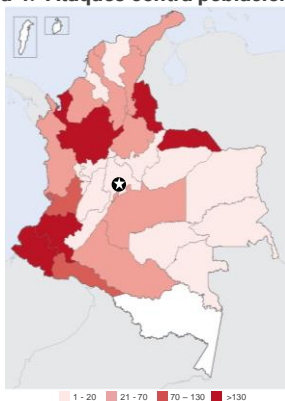
Mapa 1: Restricciones al acceso por violencia armada



Departamento	# Personas
1 Nariño	402.797
2 Antioquia	350.040
3 Norte de Santander	150.185
4 Cauca	95.904
5 Arauca	71.662
Total	1.119.460

Fuente: OCHA fecha de corte 06 diciembre 2018

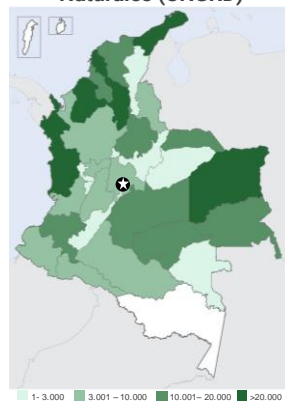
Mapa 4: Ataques contra población civil



Departamento	# Eventos
1 Nariño	328
2 Norte de Santander	233
3 Antioquia	209
4 Cauca	182
5 Arauca	141
Total	1.798

Fuente: OCHA fecha de corte 06 diciembre 2018

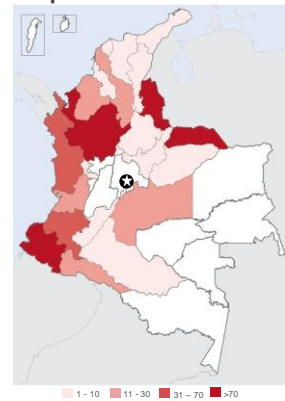
Mapa 2: Afectados por desastres Naturales (UNGRD)



Departamento	# Personas
1 Bolívar	36.093
2 La Guajira	30.071
3 Córdoba	25.264
4 Chocó	24.635
5 Vichada	21.586
Total	330.139

Fuente: UNGRD fecha de corte 05 diciembre 2018

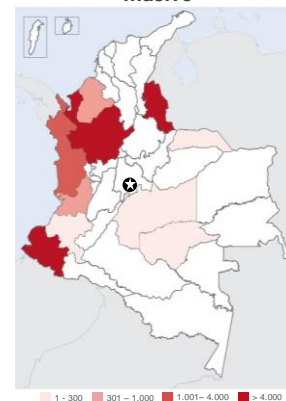
Mapa 5: Acciones Armadas



Departamento	# Eventos
1 Nariño	128
2 Norte de Santander	108
3 Arauca	91
4 Antioquia	91
5 Chocó	57
Total	661

Fuente: OCHA fecha de corte 06 diciembre 2018

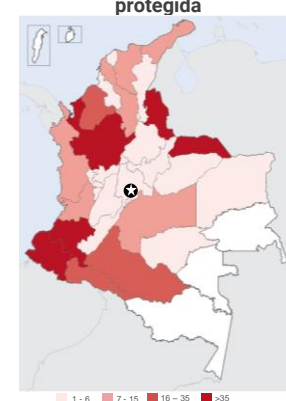
Mapa 3: Afectados por desplazamiento masivo



Departamento	# Personas
1 Norte de Santander	14.011
2 Nariño	8.970
3 Antioquia	5.079
4 Chocó	2.040
5 Valle del Cauca	819
Total	31.919

Fuente: OCHA fecha de corte 06 diciembre 2018

Mapa 6: Homicidios intencionales en persona protegida



Departamento	# Eventos
1 Nariño	100
2 Norte de Santander	89
3 Antioquia	68
4 Arauca	36
5 Cauca	31
Total	460

Fuente: OCHA fecha de corte 06 diciembre 2018